

**CAMILA MARTÍNEZ
GUTIÉRREZ**

Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena

@SoyCamMartinez

Las élites contra el Plan B

Lo que no suena lógico, dice el dicho, suena metálico. Y lo cierto es que los partidos de oposición no han terminado de explicar por qué cada que hay una propuesta para poner límites al gasto de las burocracias políticas deciden oponerse de manera tan férrea. Y esa imposibilidad de explicarlo es sustantiva. Una

tras otra, cada vez que hay una propuesta deciden desviar el debate hacia temas procedimentales o noticias. Pero cuando se revisa con detenimiento la evidencia de que México es uno de los sistemas electorales más caros del mundo, urge que la discusión sea sobre el tipo de democracia que queremos.

Durante décadas, la política en México se organizó bajo es-

quemas donde los cargos públicos funcionaban como espacios de negociación entre grupos políticos. El problema real es que esos acuerdos terminaron generando estructuras de cuotas sin ningún tipo de parámetro de proporcionalidad. Por ejemplo: hoy en nuestro país existen municipios donde un regidor representa a alrededor de 2 mil personas, mientras que en otros representa a más de 233 mil.

En los congresos locales, las diferencias también son enormes. Hay estados donde el costo de un legislador puede ser hasta 10 veces mayor que en otras entidades, como es el caso de Baja California —donde cada diputado cuesta 35 millones— frente a Colima —donde cuestan sólo 5 millones—. En la Ciudad de México, por ejemplo, se estima que cada diputado tiene un costo cercano a los 28 millones de pesos.

En este contexto se plantea el Plan B de la reforma electoral.

En primer lugar, plantea establecer límites al número de regidores, así como al gasto de los congresos locales y al presupuesto del Senado, que se reduciría paulatinamente hasta llegar a 15% menos. También contempla la regulación de los sueldos dentro de las autoridades electorales para que no ganen más que la Presidenta.

En segundo lugar, propone modernizar los procesos electorales y hacerlos más rápidos, particularmente el cómputo de resultados. En tercer lugar, fortalecer la participación ciudadana a través de mecanismos como la revocación de mandato.

Por último, se incluyen medidas orientadas a combatir el uso de dinero ilícito en las campañas, mediante la coordinación entre autoridades

electorales y financieras para fiscalizar en tiempo real.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el Plan B generaría un ahorro cercano a los 4 mil millones de pesos. La propuesta es que se queden en estados y municipios para la generación de infraestructura, ahí en esas necesidades que el pueblo pide.

Esa es la propuesta del Plan B, que abre la puerta a empezar a revisar inercias en las malas prácticas de la burocracia y asumir que los sistemas políticos deben supervisarse y limitarse para impedir que se conviertan en espacios de cooptación de quienes los administran. Sin duda es una discusión necesaria si se quiere dejar el viejo modelo de cuotas y avanzar hacia un modelo que combine representación efectiva, eficiencia en el uso de recursos y una democracia que esté al servicio del pueblo y no de un puñado.